

C.A. de Santiago

Santiago, siete de mayo de dos mil veinticinco.

**Vistos y teniendo presente:**

**PRIMERO:** Que comparece Óscar Antonio Núñez Llanca, abogado, en representación de Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile, interponiendo recurso de protección en contra del Instituto Nacional del Deporte, por haber vulnerado las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de asociación, consagradas en el artículo 19 N° 2 y N° 15 de la Constitución Política de la República.

Expone, en síntesis, que la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile es una organización deportiva constituida conforme con la Ley de Deporte, y registrada ante el Instituto Nacional del Deporte.

Sostiene que el 1 de junio de 2024 se celebró de manera presencial el Consejo Ordinario de Presidentes de la Federación, en el que se informaron irregularidades cometidas por el grupo directivo y que, con el propósito de evitar la disolución de la federación en esa oportunidad, se solicitó la renuncia de toda la mesa directiva, incluidos los miembros suplentes, quienes manifestaron de forma verbal su decisión, registrándose dichas renunciaciones en las actas del Consejo, las cuales se hicieron efectivas desde ese momento. Acto seguido, el Consejo designó por unanimidad una Comisión Electoral de tres miembros, encargada de realizar el remplazo correspondiente, de acuerdo con el artículo 29 de los estatutos de la federación.

Alega que la renuncia y remplazo de los directivos fueron comunicados al Departamento de Fiscalización del Instituto Nacional del Deporte, bajo el número de ingreso 2386. Asimismo, la comisión electoral mantuvo reuniones para informar sobre estos hechos y recibir instrucciones, las cuales incluyeron la necesidad de celebrar un consejo extraordinario para ratificar la designación de la comisión. El 12 de junio de 2024 se celebró este consejo extraordinario, y el acuerdo fue notificado a los interesados el 2 de julio de 2024.

Refiere que se estableció un procedimiento democrático para el remplazo de los cargos vacantes, invitando a todos los miembros de la organización a postular al cargo, por lo cual se convocó a un consejo extraordinario el 3 de agosto de 2024 para llevar a cabo las elecciones,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FDXBXUFWUHJ

y los resultados fueron certificados en presencia de un notario público y de los miembros de la organización, entregando la documentación correspondiente al Instituto Nacional del Deporte el 13 de agosto de 2024.

Alude que la funcionaria del Instituto Nacional del Deporte, María Soledad Deichler, ha manifestado que los directores que renunciaron se encuentran vigentes y que representan legalmente a la federación, y que ha instado a dichas personas a tomarse las oficinas de la referida federación.

Considera que los estatutos de la organización, que corresponden al reglamento tipo del Instituto Nacional del Deporte, limita las facultades de este último, a tomar nota de la elección, sin atribuirle capacidad de revisión de los documentos que se acompañan para acreditar modificaciones de la organización.

Arguye que el recurrido habría actuado de forma ilegal y arbitraria al omitir su deber de actualizar la vigencia de la organización y al negarse a reconocer el nuevo directorio democráticamente elegido, lo cual afectaría su autonomía como grupo intermedio, al exigir requisitos no contemplados en los estatutos ni en la ley, como presentar renunciaciones por escrito. También el Instituto Nacional del Deporte habría incumplido su rol de garante y custodio del registro de organizaciones deportivas.

En este contexto, estima vulneradas las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de asociación, al negar el reconocimiento del proceso electoral realizado y su tramitación de vigencia en el registro de organizaciones deportivas, generando una situación de autotutela en la Federación de Rodeo Chileno (sic), por lo que pide acoger el recurso, con reserva de cobrar perjuicios, con costas.

Aclarando, la recurrente indica que el acto impugnado corresponde a la negativa del Instituto Nacional del Deporte de cursar y otorgar vigencia a la nueva directiva, manteniendo a la organización sin representación legal, exponiendo sus activos a posibles riesgos, y señala como fecha de conocimiento el 15 de octubre de 2024, en que la encargada del departamento jurídico del Instituto Nacional del Deporte, María Soledad Deichler Carrasco, dio a conocer los nombres de los representantes de la Federación.



En un segundo escrito rectificatorio, señala que la omisión del Instituto Nacional del Deporte infringe los artículos 34 de la Ley N° 19.712, y 10 N° 2 de la Ley N° 18.593, así como los estatutos de la organización, sin perjuicio del derecho a la igualdad ante la ley y de asociarse sin permiso previo, por lo que solicita se otorgue la vigencia actualizada que acredite la elección y titularidad de sus miembros.

**SEGUNDO:** Que, al evacuar informe, el Instituto Nacional del Deporte señala, en síntesis, que, atendida la naturaleza y objeto del recurso de protección, no procede que sea utilizado para impugnar actuaciones administrativas dictadas dentro del ámbito de competencia que el propio ordenamiento jurídico entrega a una determinada autoridad.

Refiere que el rol del Instituto Nacional del Deporte se centra en la supervigilancia de las organizaciones deportivas, así como de mantener una custodia y registro de toda su documentación y, en el caso concreto, de las actualizaciones en la conformación de aquellas organizaciones con la finalidad de su mejor desenvolvimiento, encontrándose facultado para solicitar toda aquella documentación e informes que sean necesarios para resguardar los antecedentes contenidos en sus registros.

En cuanto al fondo, indica que el 1 de junio de 2024 se habría verificado la renuncia de toda la directiva de la organización recurrente, sin embargo, el acta del consejo que contiene las renunciaciones no se encuentra confeccionado en forma, pues está suscrito exclusivamente por el secretario de la Federación, infringiendo, así, el artículo 36 del Reglamento, que señala que “Las actas serán firmadas por el Presidente, por el Secretario y, además por los asistentes, o por tres de ellos que designe cada Asamblea”, por lo que no es posible considerarla ni validarla como medio idóneo para tener por acreditadas las renunciaciones.

Posteriormente, da cuenta de las renunciaciones contenidas en el acta de 1 de junio de 2024 y de las gestiones realizadas por el Instituto Nacional del Deporte con la Federación de Rodeo y de Huasos de Chile, señalando al efecto que algunas han sido consideradas válidas, en tanto que otras no, por no contar con requisitos de forma.



Señala que la recurrida ha debido pedir en reiteradas ocasiones correcciones y documentación complementaria que permitiera dar fe, de manera inequívoca de la decisión de renunciar al cargo por parte de los directores, acreditándose estas gestiones mediante correos electrónicos.

Indica que el artículo 26 de los estatutos de la Federación establece que el directorio tiene la responsabilidad de la administración superior del organismo, por lo que resulta indispensable que, en el ejercicio del rol concedido al Instituto Nacional del Deporte, sea necesario solicitar un margen de formalidad a los documentos que se requieren para efectuar modificaciones, sin que aquello constituya un acto ilegal o arbitrario.

Añade que su actuación se limita a ejercer el rol de custodio y registrar antecedentes, exigiendo únicamente un mínimo de formalidad, como la firma de documentos, o algún medio que permita acreditar la voluntad de los renunciantes, sin que la recurrente, a la fecha, haya cumplido con los requerimientos del Instituto Nacional del Deporte, lo cual ha dilatado las solicitudes de registro solicitadas, lo cual se confunde –equivocadamente- con una vulneración de sus derechos fundamentales.

Niega que se haya vulnerado el derecho de afiliación y desafiliación, así como el derecho a la igualdad y a la libertad de asociación. Añade que, en atención a su labor, le compete exigir un instrumento mínimo en el que consta una manifestación inequívoca de voluntad, como una rúbrica en el documento donde se consigna la renuncia, la declaración de testigos o algún mecanismo que pueda dar fe de aquella circunstancia, refiriendo que el acta de 1 de junio de 2024 es un documento privado, sin fecha, sin firma adecuada ni nada que pueda dar fe de las renunciaciones aludidas.

Añade que actualmente se encuentra en tramitación un procedimiento de reclamación de nulidad del directorio de Fenaro, ante el Segundo Tribunal Electoral, en la causal rol N° 71-2024, en el cual se encuentra en disputa específicamente la renuncia de toda la directiva acaecida el 21 de junio de 2024 (sic).

Finalmente, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, en representación de la Federación de Rodeo y Huasos de



Chle, por no haberse verificado actos ilegales o arbitrarios por parte del Instituto Nacional del Deporte, con expresa condena en costas.

**TERCERO:** Que evacúa informe el Segundo Tribunal Electoral, Región Metropolitana, indicando que el 16 de agosto de 2024 se dedujo reclamación tramitada en la causa rol 71-2024, interpuesta por parte de algunos directores de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile, por medio de la que se requiere la nulidad de la elección celebrada el 3 de agosto de 2024 en dicha federación, señalando como vicios del proceso electoral impugnado, la celebración de la asamblea general ordinaria de 1 de junio de 2024, en que los reclamantes y todos los demás miembros del directorio habrían sido obligados a renunciar, agregando que tal renuncia no contó con un consentimiento libre, pues la voluntad de los reclamantes estaba viciada por la presión moral de la que fueron víctimas.

Refiere que los reclamantes alegan que en la referida asamblea se procedió a nominar a la Comisión Electoral, infringiendo la norma estatutaria que dispone que la convocatoria a elecciones y los reemplazos corresponden exclusivamente a la Asamblea Extraordinaria, como también que no se permitió votar a todos los presidentes acreditados, y que algunos cargos quedaron sin ocupar, tales como dos cargos de la Comisión Revisora de Cuentas y el cargo de Responsable Institucional, finalizando con que algunos candidatos electos no cumplían con los requisitos para postular, exigidos por los Estatutos.

Añade que se contestó la reclamación en representación de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile, y que el 26 de febrero de 2025 se dictó la interlocutoria de prueba, y se fijó audiencia para la recepción de la testifical para el 13 de marzo de 2025.

Finaliza indicando que el término del periodo probatorio se encuentra fijado para el 15 de marzo de 2025.

**CUARTO:** Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la



adoptación de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones indicadas y que afecte una o más de las garantías protegidas.

**QUINTO:** Que, la repartición pública recurrida ha argumentado que al negarse a entregar a la actora el certificado de vigencia de su nuevo directorio, se limitó a ejercer el rol de custodio y de registrar antecedentes, exigiendo únicamente un mínimo de formalidad *-como la firma de documentos, o algún medio que permita acreditar la voluntad de los directores renunciantes-*, requerimiento que no fue satisfecho por la persona jurídica solicitante, vulnerándose con ello lo preceptuado en el artículo 36 del Reglamento de esta última.

**SEXTO:** Que, para dilucidar la controversia planteada es preciso tener presente que no obstante lo afirmado por la Administración, lo cierto es que examinadas las atribuciones que sobre el particular asisten al Instituto Nacional del Deporte, éstas se limitan a tomar nota de la elección de la directiva de la Federación y a certificar *-a petición de los interesados-* el registro de las organizaciones deportivas, careciendo de facultades para denegar los certificados que se le soliciten y, por cierto, para calificar la validez de una elección de directivos, cuestión que por lo demás se está debatiendo en la sede que el ordenamiento jurídico nacional establece para ello.

Es así como el artículo 36 de la Ley N° 19.712 (Ley del Deporte), al reglar el registro público de las organizaciones deportivas, cuya mantención conforme el artículo 11 del citado cuerpo normativo corresponde al Instituto Nacional del Deporte, expresamente dispone que: *“En este registro deberán constar la constitución, modificaciones estatutarias y disolución de las mismas.*

*No podrá registrarse más de una organización deportiva con un mismo nombre.*



*A petición de los interesados, el Instituto certificará el registro de las organizaciones deportivas.”.*

**SÉPTIMO:** Que, en ese entendido, solo cabe concluir que en la especie la repartición publica ha actuado de forma ilegal y arbitraria al omitir su deber de actualizar la vigencia de la organización y al negarse a reconocer al nuevo directorio elegido, afectando con ello la autonomía de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile como grupo intermedio, al exigir requisitos no contemplados en los estatutos ni en la ley, incumpliendo con ello además, su rol de garante y custodio del registro de organizaciones deportivas.

**OCTAVO:** Que, en consecuencia, con su antojadizo proceder ha vulnerado la garantía fundamental de igualdad ante la ley, garantizada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que la acción constitucional en análisis, será acogida en la forma que se indicará en lo resolutivo del presente pronunciamiento.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **se acoge**, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile, y en contra del Instituto Nacional del Deporte, debiendo la recurrida otorgar a la persona jurídica actora un certificado con vigencia actualizada que acredite la elección y titularidad de sus miembros, en un plazo de diez días corridos contados desde que el presente fallo quede ejecutoriado.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

Redacción del Ministro (s) Sr. Valderrama Martínez.

**Nº Protección-20.895-2024**

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Guillermo de la Barra Dünner e integrada, además, el ministro (S) señor Fernando Valderrama Martínez y el abogado integrante señor Manuel Luna Abarza.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FDXBXUFWUHJ



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FDXBXUFWUHJ



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Guillermo E. De La Barra D., Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogado Integrante Manuel Domingo Antonio Luna A. Santiago, siete de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a siete de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FDXBXUFWUHJ